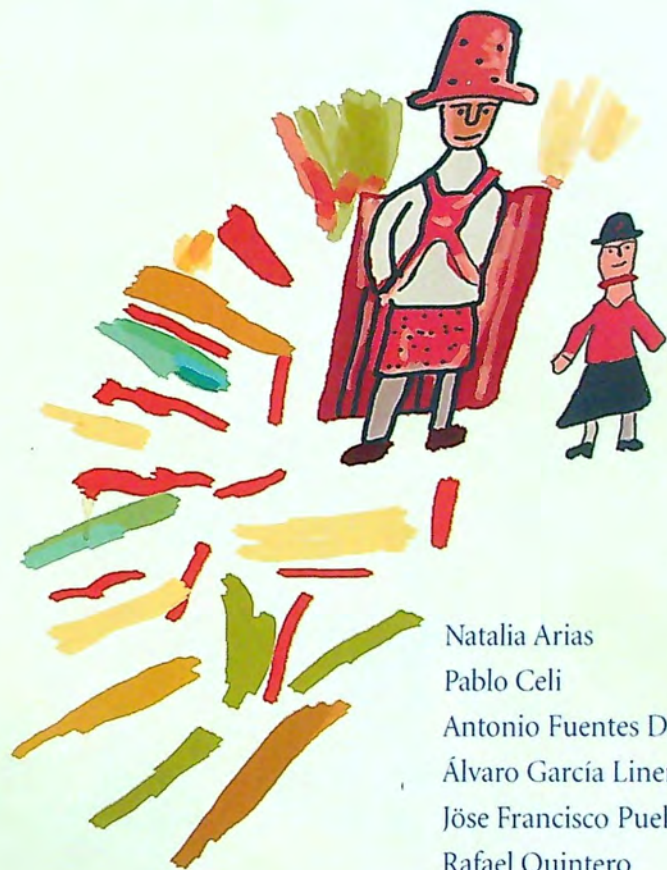


23 REVISTA CIENCIAS SOCIALES

segundo trimestre 2005



Natalia Arias

Pablo Celi

Antonio Fuentes Díaz

Álvaro García Linera

Jöse Francisco Puello-Socarrás

Rafael Quintero

Napoleón Saltos

Pablo Stefanoni

Ciencias Sociales

Revista de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas

Universidad Central del Ecuador

Segundo Trimestre 2005

Director:

Rafael Quintero López

Comité Asesor:

Natalia Arias

Enrique Ayala

Susana Balarezo

Jaime Breilh Paz y Miño

Hans Ulrich Büniger

Leonardo Espinoza

Wilson Herdoiza

Joaquín Hernández

Ariruma Kowii

Michael Langer

César Montúfar

Francisco Rohn

Wílma Salgado

Erika Silva

Carlos Tutúven

Consejo Editorial:

César Alborno

Milton Benítez

Alfredo Castillo

Pablo Celi

Julio Echeverría

Mauricio García

Daniel Granda

Francisco Hidalgo

Nicanor Jácome

Alejandro Moreano

Gonzalo Muñoz

Patricio Ruiz

Rafael Romero

Napoleón Salto

Mario Unda

Silvia Vega

Marco Velasco

Administradora:

Marcela Escobar

Comunicador Social:

Fernando García

Ira. Edición:

Ediciones ABYA-YALA

12 de Octubre 14-30 y Wilson

Casilla: 17-12-719

Teléfono: 2506-247/ 2506-251

Fax: (593-2) 2506-267

E-mail: editorial@abyayala.org

Sitio Web: www.abayayala.org

Quito-Ecuador

Impresión

Docutech

Quito - Ecuador

ISBN:

9978-22-540-4

Las ideas vertidas en los artículos de esta publicación son responsabilidad de sus autores y no corresponden necesariamente a los criterios de esta revista. La Revista Ciencias Sociales no se compromete a devolver los artículos no solicitados.

Para correspondencia dirigirse a:

Dr. Rafael Quintero. Director de Revista Ciencias Sociales

Casilla # 17034643A, Quito-Ecuador

Teléfono: (593-2) 252-6444

Fax: (593-2) 256-5822

Correo electrónico: rafaelq@interactive.net.ec

Esta Revista se publica con el auspicio del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales ILDIS

Fundada en 1976 por Rafael Quintero López

Director 1999-2001: Julio Echeverría

Director 2002: Manuel Chiriboga

Impreso en Quito-Ecuador, Julio 2005.

Índice

EDITORIAL

- 45 años de la Escuela de Sociología y CC.PP:
El Ecuador, América Latina y las Ciencias Sociales 5
Rafael Quintero

ANÁLISIS DE COYUNTURA: ECUADOR 2005

1. La rebelión de abril 2005 en Quito: Democracia sin
Partidos: ¿Una Puerta a la Refundación de la República? 13
Napoleón Salto
2. La silla prestada: fragilidad del presidencialismo y
descomposición de la política sin sujeto social 29
Pablo Celi

LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS GRANDES TEMAS DE AMÉRICA LATINA

3. Territorios, identidades y acción colectiva. Un ensayo sobre
los movimientos sociales contemporáneos en Bolivia 53
Álvaro García Linera y Pablo Stefanoni
4. La Justicia y la Turba: Linchamientos, No- Estado y Ciudadanía
en América Latina 91
Antonio Fuentes Díaz

5. El Mito de La Política: entre filosofías logomíticas y ciencias
mitológicas -interpretación desde la producción de
subjetividades mítico-políticas.....137
Jöse Francisco Puello-Socarrás

RESEÑAS

6. Sistema de gobierno y consociativismo en el Ecuador
(2002-2003) de Julio Echeverría179
Natalia Arias

La silla prestada: fragilidad del presidencialismo y descomposición de la política sin sujeto social

Pablo Celi

Las crisis de gobierno en una democracia socialmente deficitaria

La crisis política que condujo a la terminación forzosa del mandato presidencial de Lucio Gutiérrez, forma parte de un prolongado proceso de deterioro del sistema político ecuatoriano, donde, sucesivos derrocamientos de gobiernos electivos en la última década², evidencian la fragilidad del régimen presidencialista y el déficit social de la democracia representativa en el Ecuador.

Más allá de los ciclos electorales y violentando sus expresiones de gobierno, se mantiene el predominio de un orden de privilegios, ajeno a un régimen de derechos, en condiciones en

2 En los últimos ocho años, el país ha vivido el derrocamiento de tres presidentes (Abdalá Bucaram, 1997; Jamil Mahuad, 2000, y Lucio Gutiérrez, 2005); el encumbramiento de un interinazgo (Fabián Alarcón, 1997); y dos mandatos por sucesión (Gustavo Noboa, 2000; y, Alfredo Palacio, 2005).

las cuales, las instancias del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial, han perdido legitimidad social, imponiéndose la desinstitucionalización de las prácticas políticas, en desmedro de la seguridad jurídica y la vigencia de las instituciones de representación en el país.

La contracción de los espacios de representación coincide con la irrupción de tendencias autoritarias que atraviesan al conjunto del sistema y las relaciones políticas, caracterizadas por una marcada corporativización³ de la acción política, con la instalación, en el control de las funciones estatales, de partidos políticos divorciados de la representación social⁴, ajenos a la participación ciudadana y promotores de una intolerancia ideológica en la que se refleja la naturaleza excluyente y discriminatoria de las prácticas políticas hegemónicas.

El proceso político ecuatoriano se mantiene cautivo de un sistema de partidos autorregulados⁵, que unilateralmente determinan los principios legales de asociación, organización, representación y participación política y controlan los procesos de elección en todos sus niveles, imponiendo una representación política mediatizada, que tutela los recambios institucionales y los gobiernos, independientemente de su procedencia social u orientación ideológico – política y a pesar de la decadencia de la vieja representación partidaria.

El régimen político se articula en torno a los avatares de un poder ejecutivo concentrador e institucionalmente endeble, en torno al cual gravitan las demás instancias del Estado, en un mecanismo de dependencias y condicionamientos mutuos, sujetos a la negociación constante de la estabilidad y la permanencia de los gobiernos.

3 Tendencia a la segmentación de la acción política desde grupos de interés particular: económicos, sociales, étnicos, gremiales.

4 Verdesoto Luis, Instituciones y gobernabilidad en el Ecuador, Abya-Yala, Quito, 2005. Describe entre los índices de gobernabilidad la tendencia decreciente de la confianza en los partidos políticos.

5 Por efecto de la actual normativa electoral: ley de elecciones y ley de partidos políticos.

La precaria gobernabilidad se amaña como negación del gobierno, como enajenación de su autonomía de decisión, reduciéndolo a la administración del vacío de representación política, mediante la gestión negociada de un Estado institucionalmente deteriorado; condicionada al mantenimiento de la hegemonía de los grupos de poder y permanentemente intimidada por las tendencias desinstitucionalizadoras que promueven la resolución de las crisis mediante los bloqueos funcionales y el quebrantamiento de la legalidad del mandato.

Las microcrisis coyunturales, que hacen vacilar a la democracia ecuatoriana en forma periódica, devienen un mecanismo estructural del juego de presión sobre gobiernos socialmente debilitados, insertos en la crisis de representación que atraviesa al conjunto del sistema político; ante las cuales, una burocracia política carente de legitimidad se acoge, en forma reiterada, a la intervención dirimente de las Fuerzas Armadas, habituándolas al rol anacrónico de instancia legitimadora de transiciones políticas azarosas, originadas en las invariables rupturas del ordenamiento constitucional.

Bajo estas condiciones, el régimen político ecuatoriano subsiste como una democracia de élites, cuya desinstitucionalización y carencia de representatividad social conducen a constantes dilemas de legitimidad, que debilitan su continuidad institucional y precipitan coyunturas críticas, conduciendo a la inestabilidad gubernamental, al deterioro de los mecanismos electivos y a una progresiva profundización del desencanto social frente a la esfera política.

Una prolongada crisis de representación atraviesa a un sistema político elitario, inequitativo y excluyente, bajo cuyo efecto, los gobiernos desgastan precipitadamente su autoridad social y anulan su capacidad de contener la fragmentación y confrontaciones políticas, carentes de escenarios institucionales para su resolución, con lo cual, el contexto de inestabilidad crónica de la democracia representativa y profundización del desencanto social frente a la política y la institucionalidad pública, se configura en un proceso que ha conducido al debilitamiento de los fundamentos sociales de un Estado sin control ciudadano.

De una elección atípica a un gobierno difuso

La ruptura de continuidad entre la elección y el ejercicio del gobierno ha sido una constante de los gobiernos elegidos en Ecuador desde 1979. Los gobiernos en funciones no responden orgánicamente a sus electorados ni a las alianzas que les dieron origen⁶. Esta desconstitución de los fundamentos originarios ha llevado a permanentes reestructuraciones y readecuaciones en la composición de los gobiernos y ha sido un espacio de confrontaciones y tensiones de integración, acción y perspectiva gubernamental, incluidos los conflictos entre presidentes y vicepresidentes, en forma abierta o subrepticia; campo donde germinan y se desarrollan las diferencias internas de jefaturas de estado distanciadas de sus electorados y aisladas de la base social que proclamaron representar.

Esta condición general no cambió con el tránsito de Lucio Gutiérrez de candidato a presidente: la ruptura de continuidad se acentuó, más aún, en un gobierno producto de un electorado heterogéneo, disperso y políticamente desestructurado y, por tanto, carente de una base social con identidad, organización y capacidad de movilización autónoma⁷.

-
- 6 Desde la ruptura inicial del gobierno de Jaime Roldós con su partido, esta discontinuidad de lo orgánico en el gobierno, social y política, dio lugar al hábito insólito de algunos mandatarios de proclamarse "liberados de su disciplina partidaria", como fue el caso de Oswaldo Hurtado, o declarar su "independencia política", a pesar de su tradicional alineamiento, como en el caso de Sixto Durán; y estuvo presente tras la privanza de León Febres Cordero, la mutual burocrática de Rodrigo Borja o la liga de Abdalá Bucaram.
 - 7 En la propia constitución del partido de gobierno, Sociedad Patriótica, se reflejó una amalgama de sectores diversos, en una agrupación de composición heterogénea que aflora en una coyuntura política marcada por la dispersión social y los desplazamientos políticos, estructurándose a partir de sectores medios empobrecidos y en ascenso, que fueron rodeando al núcleo originario, formado por ex militares y ex policías, de una periferia de pequeños comerciantes, pequeños industriales, burócratas, desocupados y sectores urbano marginales, rurales, campesinos e indígenas.

Un voto refractario, que cobró coyunturalmente autonomía relativa desde una elemental y difusa postura *antiestablishment*⁸, convirtió inesperadamente a Lucio Gutiérrez⁹ en presidente, en las elecciones del 2002, mostrando un sintomático agotamiento de los liderazgos constituidos desde el régimen de partidos políticos. Sin embargo, los partidos tradicionales mantuvieron una votación regional que les otorgó el predominio en el parlamento y en los poderes seccionales, provinciales y municipales, frente a la limitada presencia de las agrupaciones que auspiciaron al presidente electo, lo que sería decisivo en la suerte del inédito mandato.

Más allá de las expectativas de transformación¹⁰, un curso conservador se impuso a pesar de la novedad de una elección atípica, en cuanto, el forzoso devenir electoral ignoró a las élites políticas tradicionales en la elección presidencial, pero no modificó el poder hegemónico, que no habiendo sido plenamente desplazado estableció el límite a las ilusiones y de las condiciones de ejercicio del gobierno.

El gobierno de Lucio Gutiérrez, proveniente de una tendencia electoral no estrictamente partidaria, y que cada vez lo fue en menor medida, en rigor, no respondía orgánicamente a un sector social diferenciado, como tampoco lo hizo su propuesta electoral. Ocupó las funciones presidenciales en condi-

8 Contra los liderazgos y partidos usufructuarios de la contracción de la representación política, y los grupos de poder económico y sus expresiones políticas, identificados con el deterioro de la economía, las políticas económicas recesivas e inflacionarias, la crisis bancaria y los impactos sociales de la dolarización.

9 Figura militar de la rebelión que indujo al derrocamiento del gobierno de Jamil Mahuad el 21 de enero del 2000, en la que se forjó su imagen pública identificada con un liderazgo contestatario y popular.

10 Las desproporcionadas expectativas sociales acerca de los alcances del Gobierno de Lucio Gutiérrez, para la transformación económica y política del país, tienen su origen en la confusión generada por el ocultamiento de la indeterminación de su base social tras la apariencia de una alianza electoral con predominio de sectores populares e indígenas, y, en la equívoca atribución de su articulación institucional a las Fuerzas Armadas, por la procedencia de algunos de sus miembros.

ciones de un vacío de representación política, caracterizado por la pérdida de legitimidad social de las élites; el deterioro del sistema de partidos; la omnipresencia de liderazgos políticos decadentes que gravitan sobre la política oficial ecuatoriana; el fraccionamiento regional; la presión clientelar de sectores sociales; y el control parlamentario y de los organismos de poder seccional por parte de los grupos de poder y los partidos políticos tradicionales.

En estas condiciones, el mandato de gobierno de Lucio Gutiérrez, en sus orígenes ajenos a la tradición política afectada con su elección, no logró estructurarse desde una alternativa de poder socialmente diferenciada; reducido a una interacción negociada con las élites dominantes, progresivamente fue perdiendo identidad política y social y devino conflictivo y fugaz, sujeto a administrar, sin autonomía, el vacío de representación política, en medio de constantes confrontaciones de intereses, que acumularon coyunturas críticas, conduciéndolo a un desgaste prematuro, por el deterioro de su imagen política y la erosión relativa de su reconocimiento social.

La contradictoria presidencia de Lucio Gutiérrez evidenció, desde sus inicios, la discontinuidad entre su perfil electoral, que incluía postulados reformistas en lo económico y político y la orientación efectiva del gobierno, que no respondía orgánicamente a su electorado ni a las alianzas originarias, convirtiéndolo en un espacio de confrontación y permanentes reestructuraciones y readecuaciones en su composición, que lo mantuvieron continuamente afectado por conflictos internos y bloqueos de gestión, generando tensiones propias de una acción gubernamental desarticulada, fragmentaria y coyunturalista.

El primer y mayor condicionante asumido por el gobierno fue la continuidad del esquema monetario de la dolarización y de una política económica orientada a privilegiar el pago de la deuda externa, mediante la contracción del gasto público, en la expectativa de un tratamiento favorable en los organismos multilaterales de crédito y de una inversión extranjera inaccesible.

Esta condicionalidad económica preestablecida¹¹, que el nuevo gobierno haría suya en nombre del equilibrio macroeconómico¹², le impuso una orientación desde sus inicios, atándolo a compromisos con el Fondo Monetario Internacional¹³ que redujeron su iniciativa en el manejo de los instrumentos de política económica, y, en los hechos, favorecían la revalorización de los papeles de la deuda externa ecuatoriana en beneficio de sus tenedores nacionales ligados al sector financiero, cuya regencia¹⁴ sobre la gestión económica se mantuvo durante todo el gobierno.

El gobierno debilitó su convocatoria social al postergar la inversión en una política social articulada en un modelo de desarrollo transformador de la estructura productiva, comercial y monetaria del país, al asumir una política económica conservadora de curso recesivo, en cuya definición no se incluyó a sectores sociales alternativos ni en su discusión ni en los equipos de gestión económica; mediante la cual los grupos preexistentes, bancarios y financieros, que la han definido tradicionalmente, mantuvieron la más significativa incidencia en el curso real del gobierno, más allá de aspectos políticos de coyuntura y de las tensiones internas que este predominio generó en el gobierno.

-
- 11 Este modelo se articuló como un condicionante estructural sobre la política económica con anterioridad a la asunción presidencial de Gutiérrez, mediante la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia fiscal, fijada por el Congreso en septiembre del 2002, a partir de la cual se estableció el Presupuesto del Estado para el año 2003, al cual debía sujetarse el nuevo gobierno.
 - 12 El gobierno presentó reiteradamente como sus logros fundamentales en materia económica: el incremento de la tasa de crecimiento del PIB al 3%, la reducción de las tasas de interés al 10.7%, una inflación inferior al 4%, una reducción del Riesgo País hasta los 727 puntos, después del primer año de gestión.
 - 13 A partir de la Carta de Intención, gestionada en forma prioritaria desde el frente económico, en febrero de 2003, a inicios del gobierno de Lucio Gutiérrez.
 - 14 La determinación de la política económica desde el sector bancario – financiero, se implantó desde el Ministerio de Economía y el Banco Central, con un staff de funcionarios de alto nivel y cuadros técnicos que sobrevenían desde el gobierno de Mahuad y que mantuvieron el control de las decisiones y las acciones económicas durante todo el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Bajo esta determinación en el manejo económico y desde la equivocada formulación de realizar primero la estabilización macroeconómica y luego la inversión social, la política social enfrentó límites de financiamiento que ahondaron la debilidad estructural de los programas sociales, restringidos al asistencialismo y a un manejo clientelar progresivamente sujeto a las urgencias políticas; dando lugar a una carencia de coherencia y sostenibilidad en un área fundamental para las expectativas sociales que generó el inicio popular del gobierno.

La desconfianza social y los disensos se ahondaron, también, ante la debilidad estratégica de la agenda internacional, que en nombre del practicismo, eludió las definiciones políticas y se subordinó a ilusorios soportes externos, bajo el encanto de la negociación del TLC al margen de un consenso social, y de la proximidad a la política norteamericana sobre la crisis de seguridad en la región andina, lo cual deterioró la imagen nacionalista del gobierno.

La perspectiva de una reforma política, que transforme las relaciones de dominio y los deteriorados mecanismos de representación, fue sacrificada por el colapso de la institucionalidad, al cual el propio gobierno concurrió desde su sometimiento a las presiones de los partidos, que lo entramparon en la búsqueda de mayorías parlamentarias, ante la amenaza constante de un juicio político al Presidente, logrando su aislamiento y la declinación de su autonomía e iniciativa política.

El gobierno devino difuso, fracturado políticamente, permanentemente dividido entre las tendencias que lo integraban, en torno a su orientación económica, al alcance de su política social y a su proyección internacional. Al no asumir la reorientación de la economía ni la transformación del sistema político, devino sin fundamento social, arrastrando la rémora de una formación política clientelar y atrapado entre la voluntad social de transformación del sistema político y la acción de las élites por recrear el status quo, contra la intención de cambio del electorado que lo eligió.

En su desempeño inorgánico, al que concurrieron diversos y heterogéneos intereses de sectores sociales y grupos económicos, sin un proyecto político que los articule, el gobierno enfrenta y acumula coyunturas críticas, que lo condujeron a un desgaste prematuro al agotarse la concertación social y deteriorarse su imagen

política, en mucho por su insustancialidad y opacidad ideológica y el carácter difuso e inestable de sus posiciones políticas.

El Ejecutivo aparece continuamente afectado por conflictos que inducen bloqueos de gestión, generando tensiones administrativas propias de una acción gubernamental desarticulada y fragmentaria, mientras enfrentaba reclamos sectoriales, muchos de los cuales relacionados con situaciones estructurales acumuladas: la presión de la deuda y la omnipotencia de las decisiones de los organismos internacionales de crédito en las medidas para su tratamiento; el desfinanciamiento fiscal; los desgastes institucionales en algunas instancias del Estado y la crisis en el sistema de representación política; y otros derivados de las dificultades en la estructuración y acción del gobierno y sus entornos políticos y de una coyuntura de agitación orientada a ejercer presiones desestructuradoras sobre su actuación.

Frente a un gobierno que tiene en el escenario parlamentario una gran debilidad, al carecer de una fuerza de partido autosuficiente, imposibilitado de configurar mayorías y sujeto a acuerdos circunstanciales que reducen su autonomía, los grupos de presión regional y los partidos tradicionales, le apuestan a la erosión progresiva del mando presidencial, la proliferación de conflictos sectoriales y el incremento de la tensión social, disponiendo progresivamente sus fuerzas en el escenario parlamentario y el régimen seccional, para un cierre gradual del cerco en torno a un gobierno debilitado, con las consecuencias desestabilizadoras presentes en las crisis políticas precedentes.

La acumulación del desencanto y el derrumbe del gobierno de Lucio Gutiérrez

El secuestro parlamentario

Desde la amenaza de juicio político, fraguada en el Congreso¹⁵, hasta su involucramiento en la cesación de la Corte Su-

15 En cuya consecución se asociaron Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y Pachakutik.

prema de Justicia, Lucio Gutiérrez fue extinguendo su gestión presidencial, cautivo de una administración condicionada, optó por un mantenimiento formal con una cesión del gobierno efectivo al juego de fuerzas articulado desde los grupos parlamentarios afines y opositores.

El secuestro parlamentario del Presidente, facilitado por su aislamiento en manos de un círculo palaciego que abusó de la anulación de su representación social y de su sometimiento a grupos de presión, inhabilitó su autonomía de acción política y aceleró la tendencia a su remoción.

La sujeción a intereses articulados desde la dinámica parlamentaria, por la amenaza constante a la estabilidad presidencial, dependiente de "mayorías" ad hoc en el Congreso, condujo a la subordinación del gobierno a agendas y alineamientos de fuerzas reproductoras del mecanismo de "mayorías móviles" y la caza de votos independientes por parte de los sectores de oposición y afines al gobierno, expresión de la desestructuración del sistema de partidos que ha generalizado esta forma de corrupción política.

El gobierno quedó sometido a una agenda de prioridades unilateral y confrontativa, articulada desde las disputas de intereses en el escenario parlamentario, cuya responsabilidad asumió socialmente con el alto costo político de la reestructuración arbitraria de los Tribunales Electoral y Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia¹⁶, tras la cual se produjo el cierre gradual del cerco en torno a un gobierno debilitado, con las consecuencias desestabilizadoras presentes en las crisis políticas precedentes.

16 El deterioro del gobierno se precipitó con su intervención, en diciembre de 2004, en una conflictiva y malograda reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, en la que la intención justa de despolitizar la administración de justicia, atávicamente sometida al poder económico y político, se desvirtuó por la arbitrariedad de los procedimientos y el asocio de intereses ajenos a la proclama gubernamental de despartidización del poder judicial, que finalmente terminaron utilizando el proceso en provecho de afanes políticos que concentraron el rechazo social, inmolando la transformación de la Corte al retorno de Abdalá Bucaram, con lo cual el proceso perdió legitimidad y devino vulnerable al cuestionamiento interno e internacional.

El proceso de desinstitucionalización y deslegitimación política, que afectó al conjunto de instituciones del Estado, acumuló una profunda crisis de gobernabilidad, en un escenario político en el que confluyeron el agravamiento de las tensiones sociales y la exacerbación de confrontaciones entre sectores políticos, con el aislamiento progresivo del Gobierno, sobreexpuesto, debilitado y atrapado en su propia unilateralidad y desconocimiento de la dimensión de la crisis, enfrentado al rol desestabilizador de la mayor parte de los medios de comunicación, concentrados en la sistemática degradación de la imagen y la autoridad presidencial.

Sin admitirlo, el gobierno entró en una pendiente política: el discurso presidencial dejó de comunicar, desde un desgastado mensaje y la reiteración de un tono confrontacional que amplió y ahondó los conflictos, exacerbando las tensiones antigubernamentales; la gestión evidenciaba un deterioro interno, paralizada por las tensiones políticas que ocupaban prioritariamente su atención y desarticulaban sus acciones; la arbitrariedad en la acción política oficial la impulsaba a enfrentamientos constantes e indiferenciados, que terminaron unificando a diversos sectores de oposición, a pesar de su diversidad y división de intereses y la ausencia de un liderazgo político nacional.

La secuencia de deslegitimación institucional que se levantó sobre un Congreso desprestigiado y un poder judicial desestructurado, progresivamente se hizo extensiva al Presidente de la República. En estas condiciones, la fase final del gobierno de Lucio Gutiérrez estuvo caracterizada por un ambiente de creciente conflictividad y tensión política en el país, por la proliferación de conflictos sociales en distintos sectores, la exacerbación de confrontaciones regionales, la deslegitimación institucional, y la quiebra de la autoridad del gobierno por la convocatoria a la desobediencia civil en algunas ciudades, propicia para la desestabilización conspirativa que se venía gestando meses atrás, en pos de la reconstitución de las fuerzas políticas tradicionales en el control omnímodo del aparato estatal, parcialmente debilitado en la última elección presidencial.

Deslegitimación social y conspiración política

El agravamiento de las tensiones sociales y regionales y la confrontación política, ajena a las demandas sociales y encapsulada en el reparto de cuotas administrativas por los partidos, fueron profundizando el aislamiento progresivo del Presidente Gutiérrez. Con la reestructuración ajena a normativas legales de la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales, se profundizó el proceso de desinstitucionalización y deslegitimación política, configurándose el justificativo ideológico para el desacato interno, la inducción a la desobediencia civil y la deslegitimación internacional, en un proceso reactivó el precedente planteamiento de destitución por la vía parlamentaria, bajo presión social por revocatoria del mandato.

La desestabilización conspirativa, se justificó bajo la distorsionada figura de la "dictadura" de Gutiérrez, interesadamente difundida por algunos medios de comunicación ligados a los poderes económicos, fundamentalmente bancarios, de Quito y Guayaquil y por la propaganda de los partidos y círculos políticos en el poder desde 1979. Tras este estereotipo ideológico se encubría la restauración conservadora a la que condujo el desgobernio que se cernía precipitadamente sobre el país; mientras la degeneración del ambiente político por la violencia inducida¹⁷, mecanismo de desinstitucionalización y síntoma de la descomposición de las funciones estatales, que contaminó al gobierno con una escalada de terror político, de origen nunca aclarado, dando lugar a una policialización de la política.

La acumulación del desencanto y la exacerbación de confrontaciones se fue concentrando bajo la forma de marchas ciudadanas, de ambigua convocatoria, en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, que articulaban en un confuso torrente de insatisfacción antigubernamental: las demandas ciudadanas, en algunos casos de índole social, las pugnas políticas y los

17 En el último año se registraron continuos hechos de violencia: atentados, agresiones y amenazas a personas del medio político y periodístico, sin precedencia establecida, que fueron generando un ambiente de zozobra y desconfianza social en la seguridad interna.

reclamos regionales o locales por recursos y atención estatal, profundizando el aislamiento político y la deslegitimación social del gobierno. Con desatino, el gobierno exhibió su débil representación social, al hacer uso del recurso de las contramarchas, tensando su entorno con movilizaciones sin identidad social ni sujeto político, en una parodia de participación sujeta al clientelismo y a su uso servil por parte de funcionarios obsecuentes.

Las acusaciones de "corrupción", "nepotismo", así como la caracterización peyorativa de la personalidad del presidente, constituyeron recursos ramplones de estigmatización, de fácil uso para movilizar el desencanto, que se atribuyó ideológicamente a un supuesto despertar institucionalista de la opinión pública, mientras se dejaban intocados los intereses y razones profundas de impugnación popular al gobierno: las que se refieren a una gestión de la economía sin destino social, a su concordancia con el apuntalamiento de un sistema político ajeno a la representación popular ya la resignación de la política exterior a la militarización de la política de los Estados Unidos en el área andina.

Lo jurídico y la dominación

La fiebre constitucionalista, propia del democratismo jurisdicista liberal, reprodujo una ideología que invoca un "estado de derecho" limitado a la técnica jurídica constitucional, es decir, al conjunto de reglas procesales para la administración y el control del sistema político, sujeto, en Ecuador, a constantes rupturas del marco constitucional y al manejo arbitrario de subterfugios legales para legitimar los atropellos de fuerza en un orden político desinstitucionalizado. La doblez de la moral judicial, acomodó justificaciones a favor y en contra del procedimiento de cesación de la Corte Suprema de Justicia, en dependencia de intereses y correlaciones políticas¹⁸.

¹⁸ La intervención desde el Congreso para cesar a la Corte Suprema de Justicia, reeditaba el procedimiento con el que esa Corte se integró, en contra del expreso mandato de la Asamblea Constituyente en el texto constitucional vigente desde 1998, bajo la condicionalidad de hacerlo fuera de norma "por última vez".

La simultánea invocación y exorcismo de la ruptura del orden jurídico, manejada con la doblez de la moral jurídicista, que acompañó a la descomposición del Congreso, bajo la responsabilidad de la tríada formada por el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, y Pachakutic, cómplices y beneficiarios del status quo dominante, sirvió fugazmente al aprovechamiento inescrupuloso por parte del PRE y el PRIAN, el primero volcado a una acción confrontativa y desinstitucionalizadora, en la búsqueda de una coyuntura caótica para el retorno de Abdalá Bucaram; y el segundo, empeñado en asegurarse el control institucional preelectoral, en función de la anticipada candidatura presidencial de Alvaro Noboa.

Una invocación de legitimidad soportada en el formalismo jurídico, en medio de la descomposición institucional del estado y del debilitamiento de su representatividad social, termina vinculando la política con el sistema judicial, proyección represiva de la ideología liberal decadente que redujo la política al derecho y que acompaña a una suerte de judicialización de la política, forma como se manifiesta la instrumentación política de las funciones coactivas y coercitivas del sistema judicial.

La exhibición de una moral constitucionalista, independiente de los contenidos e intereses políticos que la proclama, ha constituido una inveterado recurso ideológico de control social, reeditado en coyunturas críticas, que ha justificado alineamientos, alianzas y desplazamientos políticos desde el supuesto "bien general del Estado".

En nombre de este constitucionalismo laxo y acomodaticio, un Congreso autoextinguido como instancia de representación, que ha anulado su capacidad legislativa y devaluó su función fiscalizadora, renace para asaltar el ejecutivo y todos los demás poderes, en medio de un caos político e institucional, usando la movilización callejera para restablecerse como instancia de control político desde una reacción partidista conservadora, que se siente amenazada por al apareamiento de expresiones políticas no partidarias, por el ascenso de movimientos sociales urbanos y por la reconstitución aparente del movimiento indígena y campesino.

La catarsis conservadora de los sectores medios usurpa la representación popular

Más allá del entusiasmo de la coyuntura, el 21 de enero del 2000, no fue un ascenso del pueblo al poder, ni siquiera temporal: la trabazón de microgolpes de estado, que se sucedieron, siempre tuvo como determinación fundamental una refuncionalización del gobierno por una sucesión con el Vicepresidente Gustavo Noboa, ante la extinción de la capacidad de gobierno de Jamil Mahuad, que lesiono la soberanía monetaria, territorial y militar del país.

La *"revolución del arco iris"*¹⁹ solo existió en el imaginario de quienes han pretendido que el movimiento indígena supla la ausencia de sujeto político, pero estableció un espejo ideológico sobre el que se reflejarían formas de acción política no oficiales y asistémicas, y diverso tipo de manifestaciones del rechazo social contra la democracia de élites, hasta las elecciones presidenciales del 2002.

La matriz social de la rebelión del 2000 fue tan difusa como el voto antiestablishment que se abrió paso en las elecciones presidenciales que le sucedieron dos años después, al punto que se generó el equívoco de asociarla orgánicamente con los resultados electorales²⁰, como si estos fuesen una proyección del levantamiento indígena - militar. Lucio Gutiérrez fue a la vez, como candidato, beneficiario electoral y posteriormente, como presidente, blanco gubernamental de esta acción social difusa.

En el tránsito de la *"revolución del arco iris"* a la *"rebelión de los forajidos"*, la convocatoria al supuesto "pueblo de Quito" como actor social, suple y oculta la ausencia del sujeto popular y

19 Caracterización del levantamiento del 21 de enero del 2000, que enfatiza su fundamento popular indígena y que fuera asumida así por sectores políticos, como Pachakutik y otros ligados a la CONAIE y algunos de los denominados movimientos sociales.

20 Quintero, Rafael. Visión del Ecuador actual. En Revista Ciencias Sociales No. 21, Quito, febrero 2004. El autor realiza un amplio análisis crítico del equívoco conceptual y político de asimilar mecánicamente el proceso del 21 de enero a la elección de Gutiérrez.

encubre las funciones políticas e ideológicas de los actores reales de las rupturas del orden constitucional: la banca, los medios de comunicación ligados a ella, los partidos y círculos de poder tradicionales y determinados mandos militares.

La exacerbación antigubernamental y antipolítica, en lo que tuvo de espontánea, fue la forma catártica con la que sectores medios reaccionaron ante la usurpación de la representación política, desde un sentimiento de liberación circunstancial, discontinuo y trastornado; en su contexto reaccionario, este impulso por eliminar lo que se asume nocivo, extraño, se presentó mezclado con los componentes retrógrados del rechazo étnico desde el statu quo y los complejos aristocratizantes y racistas²¹.

La asunción del remoquete de "*forajidos*"²² para la movilización antigubernamental y la importación descontextualizada del grito "*que se vayan todos*"²³, carente de objetivos políticos ni destino social, constituyeron recursos para forjar la identidad de la que carecían los sectores movilizados desde realidades sociales ambiguas y perspectivas políticas confusas. Tras los denominados "*forajidos*", no está el acecho popular "*fuateovejuno*"²⁴, no fluye la formación de un nuevo pueblo como sujeto colectivo, sino la ausencia de sujeto social, que favorece y protege con la agitación callejera de sectores indistintos, ligados fundamentalmente a burguesía y pequeño burguesía quiteñas, la acción subrepticia de los círculos políticos tradicionales en una democracia sin instituciones de representación y privada de actores sociales estructurados, donde la exaltación de la es-

21 Silva, Erika. El coronel y los "forajidos". En Renovación No. 7, Cuenca, mayo 2005. Constituye un penetrante y lucido análisis de los factores ideológicos, que velan la identidad del fenómeno político contenido en las marchas de rechazo a Gutiérrez.

22 Término recogido de la expresión usada, en su sentido extenso, por el presidente Gutiérrez, tras el ataque a su domicilio por parte de grupos de manifestantes antigubernamentales.

23 Surgido en Argentina a raíz de las crisis bancarias, como rechazo a la colusión del poder político y económico en ese país.

24 En analogía con la expresión popular "todos a una", ante la pregunta de quien mató al Comendador en la obra dramática Fuenteovejuna de Lope de Vega.

pontaneidad, de la antiorganización, de la antipolítica, ponen en evidencia el mecanismo de control al que están sujetas este tipo de movilizaciones.

Esta ausencia de sujeto social y político en las movilizaciones de vecinos, convocadas como recurso de presión para las caídas presidenciales, oculta la identidad, procedimientos y responsabilidad política de los verdaderos actores de estas caídas, tras la ilusoria pretensión de que *"todos derrocamos a Bucaram, todos derrocamos a Mahuad, todos derrocamos a Gutiérrez"*, mediante un maniqueísmo político que proclama el bien y persigue a su correspondiente "eje del mal", forma ideológica de la intolerancia y el autoritarismo, con la que los grupos medios han interiorizado la moralina abusiva del poder.

La representación popular se enajena a la intrusión "apolítica", *fashion* de sectores altos y medios, parodia de masas que en su exaltación victimaria²⁵ se presumen autores, sin advertir su condición de instrumentos, llevados por el destino tragicómico de la autoafirmación individualista, habitualmente retraídos en la cobardía histórica y el miedo conservador ante las transformaciones verdaderas, aparecen ocasionalmente exultantes de entusiasmo frenético en los simulacros políticos.

Las fobias de la clase media quiteña han sido un recurso para la sanción conservadora contra lo otro, lo distinto, lo no admitido, lo no oficial; una manera de ser reconocidos por el poder y de sentirse próximos al poder, cuando no parte de él. Tras la divisa pequeño burguesa de la *"dignidad"*, contra la corrupción supuesta, sectores medios se asumen a sí mismos como una clase sancionadora, guardiana celosa del statu quo, que promete el ascenso social y el reconocimiento en una sociedad feudalizada en sus valores, donde la relación se servidumbre aproxima al patronímico aristocratizante. Su movilización de ocasión reedita las funciones catárticas de la procesión medieval cristiana, la de los fanáticos acusadores ofuscados tras la forja y exterminio de culpables que oculten la decadencia del sistema, bajo la mirada aus-

25 Sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles, que encendía el fuego, ataba las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio.

piciosa y protectora del poder real que levanta los cadalsos y les provee del escenario para su reconocimiento.

Una purga conservadora se encarnó en el rito de la protesta callejera, ejercida como catarsis, en el sentido griego²⁶. Este acto de sanación fanática fue el recurso de la movilización en las concentraciones quiteñas: liberarse de lo otro, de lo distinto, de lo extraño. Todo lo contrario a una revuelta, a una insurgencia, a una revolución: la movilización del miedo, la agitación de las fobias contra la amenaza de lo que está más allá del statu quo. En su falsa politicidad, el "cacerolazo"²⁷, no expresa la vitalidad de un sujeto social insurgente ni siquiera la fuerza del actor social que reclama por sus derechos, sino la comedia de la representación ausente en la política del espectáculo de las masas "forajidas" y su fiesta pequeño burguesa, en la que se extasiaron juntos el tradicionalismo reaccionario y revolucionarismo candoroso.

Lejos de constituir un proceso de ascenso de un nuevo actor social y popular ni la construcción de un sujeto político trascendente, en las caídas presidenciales²⁸ se ha ido desconstituyendo la expectativa de lo popular. Tras ninguno de los golpes de estado se ha desarrollado la representación política ni las formas institucionales de la democracia representativa, mucho menos una alternativa al estado y al sistema político imperante, en todos los casos, se ha trató de golpes de estado para la recuperación de posiciones de los partidos y las fuerzas oligárquicas regionales y círculos políticos tradicionales y han tenido como efecto la profundización del deterioro de la representación de lo popular y el extravío del sujeto político.

La catarsis de sectores medios subrogó la representación popular en las movilizaciones callejeras antigubernamentales, abriendo el camino para que el poder recupere el control de las instituciones. Más allá de la ingenua arrogancia de los sectores movilizadores en Quito, a Gutiérrez lo derrocó la colusión de la

26 Purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza.

27 Y de todas las demás formas "innovadoras": "tablazo", "rollazo", "mochilazo", etc.

28 Desde la caída de Bucaram y Mahuad, hasta la de Gutiérrez.

burocracia política tradicional amenazada con la pérdida de sus privilegios, mediante una conspiración de los partidos y los líderes tradicionales repudiados por la población, parapetados en un Parlamento sin autoridad social pero con mando en un Estado sin instituciones ni normas.

La restauración del control político tradicional

El poder le revocó a Lucio Gutiérrez la gestión de un Estado sin representación social, cuando el ambiente de tensión social y desinstitucionalización devino disfuncional para el interés de las élites y su burocracia política. Con su caída culmina un proceso que se gestó desde su elección misma: el restablecimiento del establishment en la conducción del Estado y la reconstitución de las formas de control ideológico dominante sobre los procesos sociales.

En medio de la confusión se abrió paso lo que siempre estuvo en juego: el control burocrático del aparato del Estado por los partidos tradicionales, funcionales al poder de las elites que han delegado en una burocracia política el control social y la gestión de un estado sin representación ciudadana.

Con la reedición de la consuetudinaria promesa del status quo de acabar con el status quo, encubierta tras la movilización de sectores sociales medios, fundamentalmente en Quito, en nombre de la antipolítica, se impuso la reconstitución de las fuerzas políticas tradicionales, no por una recuperación de la autoridad y el reconocimiento social de sus signos políticos ni por una ampliación de la representación popular, sino todo lo contrario, por su anulación, que profundiza la crisis de representación política, menoscabando los fundamentos democráticos del Estado.

El defenestrado presidente Lucio Gutiérrez fue una víctima de su propia falta de determinación frente a las demandas sociales de transformación del sistema político; al no conducir el proceso de su elección hacia un gobierno que desarrolle una representación alternativa, favoreció la recuperación de los intereses que proscribían su gobierno. En la búsqueda de aceptación de las élites que proclamó combatir, se alejó de la voluntad social

que dio origen a su gobierno, mientras con el simulacro de transformaciones políticas atemorizó a estas mismas élites sin tocar su poder. Envuelto en la embaucadora confianza de su mantenimiento negociado en el gobierno, salvaguardó incautamente la reconstitución de las fuerzas políticas que el pueblo rechazó con su elección y que terminarían derrocándolo.

La conflictividad social ha dado lugar a movilizaciones coyunturales, levantadas desde demandas insatisfechas y no a movimientos sociales ni políticos estructurados y con proyección estratégica. El abuso de la convocatoria inmedatista a la movilización, ha deteriorado a los denominados movimientos sociales distorsionando la participación social al subordinarla a las pugnas por el control de la administración estatal, manipuladas desde los partidos y grupos políticos ajenos a la renovación reclamada en las calles.

Un golpe de estado parlamentario forjó abusivamente la destitución inconstitucional del Presidente, con la pacata complicidad de los mandos militares, recelosos de la condena de las élites, puestos a reproducir el rol legitimador del poder militar sobre las instituciones políticas derruidas, ante la presión de los hechos consumados. A esta lamentable intervención política de los mandos militares, coadyuvó el estropeo institucional de las Fuerzas Armadas, por las secuelas del golpe de estado del 21 de enero del 2000 y por el desgaste de la institución militar durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el que se ahondaron las fracturas y distorsiones institucionales también en el sector militar.

Los gobiernos post caídas, instaurados en forma arbitraria, antidemocrática e inconstitucional, en nombre del discurso "moralizador" de la anticorrupción, han sido los medios para el imperio de la mayor corrupción política: La usurpación de la voluntad electoral, mediante una suerte de fraude diferido, que apuesta al lucro con deterioro inducido del gobierno electivo. Las sucesiones presidenciales han sido un mecanismo para la usurpación de la representación tras la elección de presidentes disfuncionales al poder y sus partidos, recurso autoritario para burlar la voluntad electoral favorable a representantes no consentidos y restaurar el control de los partidos perdedores de elección.

nes mediante gobiernos tutelados por las fuerzas comprometidas en los golpes de estado²⁹.

La caída de Lucio Gutiérrez da cuenta de un proceso en el que los poderes públicos colapsaron en medio de la desinstitucionalización y deslegitimación que devinieron de la anulación de la representación política, poniendo en evidencia la fatiga social de una democracia de elites y la fragilidad estructural del presidencialismo, que ha constituido la forma institucional de la dominación política, que comienza a ser socialmente cuestionada.

Un gobierno se derrumbó y otro se encumbra en la inconsciencia compartida de su destino patético: carecer de identidad y autonomía frente al poder real, para cuya doble moral judicial, en determinadas condiciones lo inconstitucional es deplorable y en otras emblemático.

En medio del sin sentido de una democracia sin instituciones, las fuerzas políticas hoy pugnan por repartirse lo que ha quedado de un Estado maltrecho, cuya fragilidad política, anomia social y laxitud jurídica no dejan de sorprender a la comunidad internacional y mantienen en la perplejidad al pueblo ecuatoriano.

Bibliografía

Bustamante, Fernando

- 2004 *La política y la picaresca: reflexiones sobre el no tan nuevo orden de la "sociedad patriótica"*. Ecuador Debate No. 61, CAAP, Quito.

CAAP, Equipo Coyuntura

- 2003 "Presupuesto general del Estado y Carta de intención, rinden tributo a los acreedores de la deuda pública". *Ecuador Debate* No. 58, CAAP, Quito.

29 Mediante este recurso antidemocrático a Abdalá Bucaram le sucedió el interinato obsecuente de Fabián Alarcón, a Jamil Mahuad el gobierno anodino de Gustavo Noboa y a Lucio Gutiérrez el gobierno mediatizado de Alfredo Palacio.

- Celi, Pablo
 2000 "La decadencia política de un estado sin ciudadanía". *Revista Ciencias Sociales* No. 18. Quito.
 2002 "Vacío de representación política en un país fragmentado". *Revista Palabra*, Quito
 2004 "Inercias institucionales y fatiga social de la democracia representativa en Ecuador". *Ponencia en Seminario Internacional: Ecuador, un país andino ante el reto de la globalización*. Madrid
- Chiriboga, Galo
 2005 "Crisis Institucional del Ecuador". *Tendencia* No. 2, Tramasocial, Quito
- Echeverría, Julio
 2005 *Sistema de gobierno y consociativismo en el Ecuador (2002-2003)*, UASB, Quito
- Quintero, Rafael
 2000 "El alzamiento popular del 21 de enero y sus implicaciones para la democracia en el Ecuador". *Revista Ciencias Sociales* No. 18. Quito
 2002 *Entre el hastío y la participación ciudadana*. Abya-Yala, Quito.
 2004 "Visión del Ecuador actual". *Revista Ciencias Sociales* No. 21, Quito
 2005 "El fracaso del asalto al poder total". *Revista Renovación* No. 6, Cuenca
- Silva, Erika
 2005 "El coronel y los "forajidos". *Revista Renovación*. No. 7, Cuenca.
- Verdesoto, Luis
Instituciones y gobernabilidad en el Ecuador. Abya-Yala, Quito.